

Raymundo González, Michiel Baud,
Pedro L. San Miguel y Roberto Cassá (Eds.)

Política, identidad y pensamiento social
en la República Dominicana
(Siglos XIX y XX)

DOCE  CALLES

ACADEMIA DE CIENCIAS DE DOMINICANA

SUMARIO

INTRODUCCIÓN	9
EL PENSAMIENTO DE BONÓ: NACIÓN Y CLASES TRABAJADORAS	41
<i>Raymundo González</i>	
EUGENIO DESCHAMPS ANTE LA EDAD DE ORO DEL LIBERALISMO	65
<i>Roberto Cassá</i>	
HOSTOS Y LA CONCIENCIA MODERNA EN REPÚBLICA DOMINICANA	95
<i>Raymundo González</i>	
NACIÓN Y ESTADO EN EL PENSAMIENTO DE AMÉRICO LUGO	105
<i>Roberto Cassá</i>	
ABIGAÍL MEJÍA Y LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA DOMINICANO	131
<i>Lusitania Martínez</i>	
MANUEL ARTURO PEÑA BATLLE Y JOAQUÍN BALAGUER Y LA IDENTIDAD NACIONAL DOMINICANA	153
<i>Michiel Baud</i>	
«UN PERMANENTE GUERRILLERO». EL PENSAMIENTO SOCIAL DE RAMÓN MARRERO ARISTY (1913-1959)	181
<i>Michiel Baud</i>	

HISPANIDAD Y LA IDENTIDAD NACIONAL DE SANTO DOMINGO	213
<i>Meindert Fennema</i>	
PREMODERNIDAD, MODERNIDAD Y NARRACIÓN EN JUAN BOSCH	239
<i>Pedro L. San Miguel</i>	
PENSAMIENTO PSICO-SOCIAL E IDENTIDAD NACIONAL EN LA SOCIE- DAD DOMINICANA	253
<i>Josefina Záiter</i>	
LA CIUDADANÍA DE CALIBÁN: PODER Y DISCURSIVA CAMPESINISTA EN LA ERA DE TRUJILLO	269
<i>Pedro L. San Miguel</i>	
BIBLIOGRAFÍA	291
ÍNDICE GENERAL	297

INTRODUCCIÓN¹

El establecimiento de la nación dominicana en el siglo XIX ocurrió en un proceso largo, doloroso y complejo. La relación conflictiva con el vecino haitiano, los problemas de la fragmentación regional y la frágil base económica confrontaron a las clases dirigentes dominicanas con problemas que fueron casi imposibles de resolver en corto plazo.

No es sorprendente que desde las postrimerías del siglo XIX, muchos intelectuales trataran de llegar a una definición de la identidad dominicana, en el sentido de un mejor entendimiento de las características básicas de «lo dominicano». La revisión de esta temática intelectual constituye el eje de este libro.

Basándose en escritos de algunos intelectuales dominicanos de los siglos XIX y XX, los autores de los capítulos de este libro tratan de identificar los temas fundamentales de esta búsqueda. No se limitan a los intelectuales o ideas puramente «nacionalistas». Uno de los puntos de partida de este libro es que «lo nacional» era pensado en variados niveles, que no son necesariamente políticos. Se pueden encontrar elementos de ello también en escritos sobre la infraestructura, la agricultura o la cultura popular. En consecuencia, los autores que colaboran en este libro analizan, cada uno bajo su prisma personal, cómo fue pensada la sociedad dominicana y de qué maneras se expresaba «lo nacional».

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que se encuentran entre los intelectuales tratados en este libro, y la variedad de temas tocados por ellos, se pueden descubrir tendencias generales. En esta introducción, trataremos de destacar algunos elementos generales que han determinado el pensa-

¹ Los editores agradecen al Proyecto Atlantea, al Centro de Investigaciones Históricas, al Departamento de Historia y al Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico el apoyo recibido en la preparación de este volumen. Igualmente, agradecemos al estudiante graduado Carlos Altgracia Espada su colaboración en este proyecto editorial.

miento intelectual dominicano. Refiriéndonos, implícitamente, una y otra vez, a los ensayos del libro, esperamos identificar algunas de las líneas esenciales de la historia intelectual de la República Dominicana.

Con esta introducción se pretende paliar en parte el hecho de que autores y temáticas de importancia no hayan sido incluidos en los capítulos del libro. Como es lógico, por otra parte, en la medida en que este libro se concibió en forma de ensayos mayormente centrados en individualidades, quedaban pendientes de exposición hilos de comunicación entre ellas. En cualquier caso, este libro se propone contribuir al avance de un objeto todavía poco trillado, como es la evolución de las ideas sociales y políticas en República Dominicana en los siglos XIX y XX.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

Las peculiaridades de la evolución de los sectores intelectuales en República Dominicana remite a la accidentada historia política del país durante los siglos XIX y XX. Adoptó senderos distintos a los de otros países latinoamericanos, debido a su cesión a Francia en 1795 en virtud del Tratado de Basilea. Este hecho dio paso a un impacto especial del proceso revolucionario que se llevaba a cabo en la vecina colonia de Saint Domingue, la más importante de las posesiones francesas, que culminó con la proclamación del Estado haitiano en 1804. Desde ese momento los gobernantes haitianos se formularon el objetivo de incorporar la colonia española de Santo Domingo, a la cual denominaban «Partie de l'Est».

A causa de esa incidencia de los haitianos, resultante del Tratado de Basilea y de la debilidad económica previa, Santo Domingo no siguió la evolución de las otras posesiones antillanas de España, Cuba y Puerto Rico, donde se produjo un acrecentamiento de la esclavitud. Por el contrario, los invasores haitianos dispusieron, siempre como primera medida, en 1801 y 1822, la abolición de la esclavitud; en términos generales, aplicaron programas que se correspondían con la reforma liberal tendente a la conformación de un Estado moderno. Debe tomarse en consideración, asimismo, que los grupos dirigentes del período colonial emigraron en masa, en el filo entre los siglos XVIII y XIX, ante la perspectiva de la cesión a Francia o el hecho consumado de la presencia haitiana. De forma que el proceso subsiguiente estaría marcado por contornos de discontinuidad. Ahora bien, detrás de las formalidades liberales introducidas por franceses y haitianos quedaba un régimen político autocrático y arcaico, inhabilitado para acometer un programa de modernización.

A pesar de la precariedad de todo este proceso, finalmente, durante los veintidós años de ocupación haitiana se inició un lento proceso de recuperación demográfica y económica que condujo a la regularización de las nuevas relaciones de producción y a la eclosión incipiente de los grupos urbanos. En ellos vino a plantearse inevitablemente la cuestión nacional, como reacción ante el exclusivismo del sector mulato dirigente de Haití, el cual rehusaba a considerar cualquier status en Santo Domingo que reconociese un pueblo distinto. Esta tensión fue creciendo en la medida en que, en contraste con el relativo dinamismo de la economía dominicana, la economía haitiana experimentaba un persistente estancamiento de sus índices de productividad.

Por lo anterior, terminaron de prepararse las condiciones para que los dominicanos declararan su independencia en 1844, beneficiándose del momento en que se hizo patente una severa confrontación entre diversos actores presentes en el escenario haitiano.

La superación de la esclavitud y la desarticulación de la clase de terratenientes ganaderos del período colonial fueron acompañadas por un proceso generalizado de *campesinización*, que combinaba tendencias presentes en el período colonial y los efectos de las medidas de los gobernantes haitianos. En ese contexto, se produjo una reestructuración de los mecanismos de reproducción de la economía y la sociedad. Entre ellos, el principal radicó en la conexión directa con el mercado mundial basada en una clase de comerciantes provenientes de diversos países europeos, que ocupó la posición cimera en el ordenamiento económico. Pero se trató de un sector sumamente débil, carente de medios y perspectivas para imponer una dirección de construcción nacional.

Esta dificultad tenía su raíz en el propio esquema de reproducción del sistema económico, puesto que implicaba un lento avance de la generación de excedentes mercantiles a causa de la reticencia del campesinado, que orientaba su producción en función de la autosubsistencia. Por otro lado, la precariedad del alto comercio impedía su incursión en actividades terratenientes. Quedaba, a lo sumo, un sector intermedio de parcial origen colonial, en lo fundamental dedicado al corte de maderas preciosas, que se conectaba de manera crucial con las posiciones preponderantes en el ordenamiento político y militar.

Pero todavía no estaban dadas las condiciones para la culminación del sentimiento nacional. Los grupos dirigentes, fuera por apego instintivo al colonialismo, por lucidez acerca de su impotencia o por temor a las invasiones haitianas, desconfiaban de su propia capacidad de plasmar un proceso de cons-

trucción nacional. Por su parte, la masa campesina adoptaba una racionalidad articulada alrededor de la defensa de las ganancias sociales obtenidas, en particular el acceso a la tierra en condiciones de libertad personal. Ante tal falta de derroteros políticos modernos del interés de clase del campesinado, no se pudo producir una confluencia de éste con los promotores del nacionalismo, de orientación liberal, quienes formaban parte, en términos generales, de los mismos sectores urbanos dirigentes.

Sobre la base del panorama arriba descrito se explica que la independencia dominicana se hiciera en un proceso tan precario y accidentado. Ya en 1808, ciertamente, habían aparecido los primeros partidarios de la autodeterminación, pero fueron fácilmente desplazados por los partidarios de la orientación colonialista. En 1821 una primera declaración de Estado independiente, protagonizada por los burócratas criollos, quedó en el vacío, permitiendo la entrada del presidente haitiano Boyer sin disparar un tiro.

De 1844 en adelante, la existencia del Estado independiente fue visualizada, en lo fundamental, como circunstancial por los incumbentes de sus posiciones dirigentes, hasta tanto se pactara un acuerdo de protectorado o anexión con alguna potencia. Esto finalmente se produjo en 1861, cuando el presidente Pedro Santana, la figura de mayor prestigio en la época como cabeza del bando conservador, anunció la reincorporación del país a la monarquía española. La reacción nacional no se hizo esperar, librándose una guerra de dos años que obligó a España a retirarse. Sin embargo, todavía no terminaban de consolidarse los referentes de la conciencia nacional en la masa de la población e incluso en porciones considerables de los medios dirigentes. Antes de conformarse propiamente una ideología nacional hegemónica, todavía el país conoció un intento de anexión a Estados Unidos en 1870.

La implantación de relaciones capitalistas en la agroexportación, a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX, contribuyó poderosamente a variar el panorama arriba descrito, aunque no eliminó todos los factores intervinientes en el mismo. Los liberales lograron hacerse con el poder de forma estable, en 1879, bajo la premisa de la construcción de un Estado soberano con rasgos democráticos, basados en la idea del progreso como fórmula que sintetizaba la economía capitalista y las instituciones y productos culturales asociados a ella.

No obstante la importancia que tuvo el conjunto de cambios de finales del siglo XIX, no condujeron a la consolidación estable del Estado-nación, el cual en adelante se debatió entre las alternativas de la tiranía o la anarquía protagonizada por los caudillos regionales. Se puso de manifiesto que no ha-

bía concordancia necesaria, como se había supuesto, entre el progreso material y la democracia. El heredero del colectivo liberal, Ulises Heureaux, se encargó de implantar la primera dictadura moderna de tipo capitalista.

Pero la dictadura tampoco logró proyectarse como panacea ante las debilidades de los grupos dirigentes. El régimen de Heureaux terminó en el caos financiero y fue sucedido por confrontaciones incesantes de coaliciones de caudillos que prepararon las condiciones para que Estados Unidos ocupara el país en 1916, dentro de un tinglado de control geopolítico de la Cuenca del Caribe.

Los invasores norteamericanos duraron ocho años, durante los cuales realizaron lo que los liberales y los dictadores habían tratado infructuosamente: la centralización de los poderes en el gobierno nacional, la puesta en vigencia de un conjunto de leyes propicias al desarrollo capitalista y un vasto programa de obras de infraestructura que hiciera viable la expansión de la agroexportación y, al mismo tiempo, la formación del mercado interno.

La principal institución conformada por los norteamericanos fue un ejército profesional y «apolítico», que materializó una brecha irreductible entre Estado y sociedad como colofón de la modalidad oligárquica del desarrollo capitalista. Con naturalidad, ese ejército quedó como el heredero del orden moderno instituido, que se puso de manifiesto a raíz de la crisis económica internacional de 1929. Esta abrió las puertas a un golpe de estado del jefe del ejército, Rafael Leonidas Trujillo, quien ejerció una férrea dictadura durante los 31 años siguientes. Bajo su prolongada administración se completó lo iniciado por los norteamericanos, en cuanto a un programa arduo de modernización económica y centralización política. Por los azares de los procesos, le tocó a Trujillo sentar las bases de la industrialización ligera y el desarrollo orientado hacia el mercado interior. Sobre todo durante la segunda mitad de la dictadura, tras la Segunda Guerra Mundial, el país experimentó cambios que se sintetizaron en el arranque del proceso de urbanización.

A pesar de la importancia del peso que tuvieron las transformaciones ocurridas durante la dictadura de Trujillo, ésta comportaba tensiones que llevaron a su caída. Tras este hecho no pudo articularse un proyecto de construcción de un orden democrático, en gran medida como producto de la debilidad de los sectores progresivos emergentes y de la atención geopolítica prestada por Estados Unidos, que se dispuso a asumir una función rectora, como se puso de manifiesto en la intervención militar de 1965. Sumadas la preponderancia estadounidense y las perspectivas de los grupos dirigentes internos, terminó conformándose un orden autoritario matizado, abierto a con-

cesiones a ciertas libertades, bajo la presidencia de Joaquín Balaguer, uno de los principales intelectuales y funcionarios del período trujillista. La persistencia del autoritarismo como nota distintiva de la conformación del ordenamiento estatal reciente, resume la prolongada subsistencia de vacíos hegemónicos resultantes de las debilidades políticas y culturas de las clases superiores y la no materialización de alternativas por parte de otras clases.

LA ENCRUCIJADA DEL LIBERALISMO TEÓRICO

La apretada síntesis arriba expuesta permite razonar el vacío en que cayó la cultura formal de elites a inicios del siglo XIX. Las órdenes religiosas habían emigrado, al igual que los funcionarios de la administración colonial y una porción elevada de las personas cultas. En consecuencia, se hizo en extremo difícil que advinieran paradigmas culturales emergentes, como demandaban las circunstancias, en primer lugar la existencia fáctica de un Estado nacional desde 1844. La mayor parte de las elites estaban penetradas de sentimientos de frustración y de temor que conferían asidero a la cosmovisión conservadora, en el sentido de que de una u otra manera justificaba el anexionismo o un régimen autocrático.

Pero, paralelamente, hizo acto de presencia el espíritu liberal por fuerza de las cosas y de la conveniencia de porciones de los grupos emergentes. Desde la cuarta década del siglo XIX el liberalismo en ciernes se asoció a la aspiración por la autonomía nacional y la democracia. Por eso, la gestación ideológica del Estado nacional, en 1844, fue la resultante de una sociedad secreta de liberales jóvenes, comandada por Juan Pablo Duarte.

El hecho de la independencia frente a los poderes europeos y el contexto internacional favorecían que, en perspectiva, se consolidara la orientación liberal como referente ideológico básico de la intelectualidad. Ahora bien, paralelamente, la función crucial en los ordenamientos políticos y estatales que desempeñaba, llevaba a muchos intelectuales a adoptar posturas adscritas a una lógica conservadora. Tal disyuntiva explica que desde bastante pronto las diferencias entre liberales y conservadores tendiesen a diluirse en buena medida. Desde 1844 los conservadores en el poder tuvieron que reconocer multitud de componentes propios de la tradición liberal a partir de la Revolución Francesa y la influencia haitiana. En ese tenor, trataron de adaptar el ordenamiento estatal autocrático a esquemas jurídicos modernos.

De todas maneras, se registró un contenido de innovación en lo que representaba la intelectualidad liberal. Se asociaba, en medida considerable,

con la expansión de los mecanismos mercantiles. Por esa razón, tras el fracaso del partido liberal en ocasión de la independencia de 1844, la corriente de hecho resurgió años después en Santiago de los Caballeros, centro urbano del Cibao, región donde se había venido expandiendo la agricultura comercial del tabaco. Fue sintomático, además, que en sectores dirigentes del Cibao se produjera una interrelación entre el espíritu liberal y los intereses regionalistas. Tal conexión se ratificó en la contienda contra España de 1863 a 1865, la cual no dejaba de tener cierto tinte regional, al tiempo que social, y reiteraba aspiraciones por la autonomía en las masas y los medios dirigentes. Tras esa guerra prácticamente el conservadurismo salió de la escena como corriente doctrinaria, y quedó restringido a mera fórmula de compactación de los caudillos que apoyaban a los jefes de orientación anexionista.

Pero hasta la consolidación del Estado-nación, al final del siglo XIX, inevitablemente se perpetuó la dicotomía entre liberales y conservadores en función de las respuestas distintas que se ofrecían ante la viabilidad de la autonomía nacional y del establecimiento de un sistema democrático. En ese debate, como lo puso de manifiesto Pedro F. Bonó, el liberalismo conoció respuestas que lo llevaban a situarse como opción ideológica funcional de las clases superiores.

En el colectivo de intelectuales pasó a ponerse sobre el tapete el conjunto de temas que se derivaban del imperativo de la construcción de un orden nacional. Su viabilidad no era evidente, por lo cual hubieron de trazarse las fórmulas de concreción del programa. Los liberales, penetrados de una mentalidad de elite, sobre todo tenían que clarificar cómo un colectivo compuesto fundamentalmente de personas a su juicio no aptas para la vida civilizada iba a integrarse al progreso de la modernidad y de la democracia; en breve, cómo se lograría que el pueblo deviniese en agente forjador de su destino.

Las respuestas apegadas a la ortodoxia liberal rápidamente debieron confrontar desfases entre progreso económico, nivel cultural e instituciones políticas. Advinieron al respecto exploraciones que constituyeron el momento más intenso de plasmación de una ideología nacional.

El aspecto más sobresaliente de esta indagatoria radicó en la determinación de las razones por las cuales seguía siendo inabordable la plasmación del objetivo global de la intelectualidad. En las décadas finales del siglo XIX había ido madurando, al igual que en el conjunto de América Latina, una «ideología del progreso», que no hallaba medios de realización.

LA UTOPIA DEL PROGRESO

Aunque la ideología del progreso había estado presente en los proyectos ilustrados desde las últimas décadas del siglo XVIII, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando esta concepción se articuló de manera consistente a un proyecto de construcción nacional estatal. Tocó al pensamiento liberal introducir la idea del progreso como valor colectivo, pero no fue de su patrimonio exclusivo. En esta idea se resumían, para la época, las aspiraciones a una sociedad moderna y libre; moderna, por cuanto tendía a asumir como referentes la civilización material capitalista y el espíritu científico del occidente europeo; y libre porque se proponía fundar una sociedad republicana, sin privilegios estamentarios, basada en la igualdad ante la ley, sin más diferencias que las derivadas del talento y las aptitudes de sus individuos.

En esta articulación los intelectuales desempeñaron un papel preponderante, mediante el cual se definió su mediación entre el Estado, como realidad o como utopía, y la población en general. De esta manera los intelectuales fueron percibidos por la población mayoritaria rural y urbana como los portadores de una racionalidad propia de la dirección del Estado para alcanzar el progreso, por donde encontraron asegurado un espacio legítimo en dicho proceso de construcción nacional-estatal.

De alguna manera la consigna del progreso anunció la caducidad del orden colonial en el continente hispanoamericano. Sin embargo, en la República Dominicana la utopía del progreso como proyecto nacional debió vencer las aspiraciones de alcanzar dicho progreso mediante un retorno a la situación colonial. El «anhelo de dependencia» de los grupos dominantes tradicionales, inducidos a mantenerse en el poder por los representantes de los poderes coloniales viejos y nuevos que incidían en el Caribe de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, fue una constante poderosa en el esquema de reproducción de la frustración respecto de la capacidad nacional para lograr el progreso. Las corrientes conservadoras sostenidas por dichos grupos tradicionales, argumentaron en favor del retorno a la situación colonial o de una protección extranjera, apoyándose no solo en la amenaza haitiana, sino sobre todo en la imposibilidad del país para alcanzar el progreso por sí solo. En efecto, el Acta de Independencia de los restauradores dominicanos de 1863, expresaba tempranamente cómo este argumento había inducido «al pueblo», esto es, a los grupos sociales influyentes en la opinión, a condescender o prestar su apoyo a la «Anexión», que suprimía la independencia recién conquistada.

De lo que se trataba era de resolver la cuestión del progreso desde las potencialidades y límites que tenía el país o llamar a las potencias extranjeras a que vinieran a hacerlo. Tras la Restauración de la República (1863-1865), otra vez son los pensadores liberales los que se adentran a examinar las vías posibles de progreso y los obstáculos que dichos caminos encuentran en la sociedad dominicana. Estudios y opiniones diversos aparecen en la prensa sobre la circulación monetaria, el crédito, los caminos, la calidad de los productos de exportación, así como otros problemas más generales como la necesidad de escuelas, etc. Todo ello va perfilando el debate agrario de las últimas dos décadas del siglo XIX. La idea del progreso encontró entonces un fundamento clave en la transformación económica del país. Los intelectuales discutieron los problemas de la reforma de la propiedad, para adecuarla a los requerimientos de la propiedad capitalista moderna, la conveniencia de expandir los nuevos cultivos de exportación (azúcar, cacao, café), la urgencia de superar la arcaica explotación hatera, así como la necesidad de transformar los hábitos de cultivo tradicionales de los campesinos.

Hacia 1894 ya Emiliano Tejera había resumido la cuestión agraria en los dos grandes obstáculos a superar para alcanzar el progreso de la agricultura: los inconvenientes de la crianza libre y los terrenos pro-indivisos, llamados comuneros.

Desde antes el progreso involucraba también el «problema de la paz», esto es, el fin de las revoluciones. La paz era entendida como la posibilidad de trascender las luchas intestinas por el poder político, o entre cabecillas de distintas facciones regionales que querían acceder al poder en su región o mantener su control absoluto sobre áreas e instituciones que convenían a su interés privado, levantando para ello pequeños ejércitos de campesinos, desafiando en cualquiera de los casos al poder central. De ahí que la cuestión agraria también se asociara a la cuestión de la paz y que los intelectuales se presentaran como mediadores en favor de la paz y el progreso. En 1906, al referirse a dicha articulación, Tejera sentenció: «El revolucionario i el cerdo son los dos enemigos principales del país».

El desarrollo de la industria azucarera provocó corrientes inmigratorias y de intercambio comercial más sólido y amplio con los países centrales, a la vez que hizo del país una presa codiciada por los capitales usurarios que obtenían ventajas jugosas en sus negociaciones con gobiernos y naciones débiles. Muchos intelectuales vieron sin embargo una posibilidad que había que aprovechar para salir adelante en la senda del progreso y desempeñaron una labor publicista de defensa de la modernización acelerada, sin reparar en sus consecuencias no deseables.

Así pues, las décadas finales del siglo XIX fueron caracterizadas por una preocupación obsesiva con las posibilidades del progreso material. Este progreso se llegó a considerar como una obligación indispensable para sacar el pueblo dominicano del letargo. Rechazar el progreso se convirtió en un acto inmoral o criminal. «Ningún pueblo tiene derecho a apoderarse de un pedazo de la tierra y esterilizarlo para la civilización, para el progreso...», escribió José Ramón López en 1896.

Se consolidó el sesgo por el progreso deseado por la elite fundamentalmente en el incremento de la producción exportable, y para ello la creación de caminos, ferrocarriles y líneas telegráficas y telefónicas. En el paradigma liberal vigente en esta época, estos cambios deberían realizarse mediante el libre funcionamiento del mercado. Empresarios privados deberían invertir sus capitales. La mano de obra acudiría como consecuencia de los sueldos pagados por las nuevas empresas. Así, un país subdesarrollado como la República Dominicana gradualmente se transformaría en un país moderno gobernado por las leyes eficientes del mercado libre.

La realidad era muy distinta. A pesar de la ideología liberal, el Estado tenía que jugar un papel importante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, la agricultura capitalista necesitaba un mercado de tierras inequívoco, que debía ser regulado por el Estado. Ocurrencias parecidas se reiteraron en otros renglones de la vida económica que demandaban intervención estatal para favorecer el cambio deseado. Esta situación causó una ambigüedad profunda en los círculos políticos e intelectuales del país: por un lado, los intelectuales creían en el libre mercado y en un papel limitado del Estado; en sentido inverso, tenían que recurrir a este mismo Estado, en forma creciente, para la consecución del progreso deseado con tanta fuerza.

Otro problema que los intelectuales de esta época tenían que enfrentar era que muchos de los capitales que iban a transformar la sociedad dominicana provenían del extranjero. Las plantaciones de azúcar que se establecieron en el sur se convirtieron en enclaves norteamericanos. Los ferrocarriles se construyeron con capitales europeos. La deuda exterior se trasladó de financieros europeos a manos norteamericanas aumentando la dependencia de los Estados Unidos. Ello condujo al país a la pérdida del control sobre los aduanas en 1907 y, finalmente, a la ocupación norteamericana en 1916. La otra cara del progreso era, pues, una dependencia cada día mayor.